

RV: RECURSO DE CASACION: PPL- JAIMES RUIZ RICAR ANDERSSON

John Alexander Ruiz Beltran <Johnrb@cortesuprema.gov.co>

Lun 05/09/2022 15:00

Para: Recepcionprocesospenal <recepcionprocesospenal@cortesuprema.gov.co>; solicitudesjuridica.cocucuta@inpec.gov.co
<solicitudesjuridica.cocucuta@inpec.gov.co>; 422-COCUC- COMPLEJO CUCUTA-3 <juridica.cocucuta@inpec.gov.co>
CC: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (12 MB)

PPL- JAIMES RUIZ RICAR ANDERSON.pdf;

CESG N° 1496

Señores

Secretaría de la Sala de Casación Penal

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ref: Traslado N°656 de tutelas contra los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

Accionante: Richard Andersson Jaimes Ruiz

Accionado: Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta

Para los fines pertinentes, se reenvía el correo electrónico que contiene adjunta la acción de tutela citada en la referencia.

Comunicación del traslado

Señor

RICHARD ANDERSSON JAIMES RUIZ

Interno

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Cúcuta, Norte de Santander

Mediante el presente, se comunica que para los fines pertinentes la acción constitucional se remitió a la Secretaría de la Sala de Casación Penal, cuyo correo electrónico es secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co, solicitándole que a futuro tratándose del asunto se dirija única y directamente al e-mail señalado, en aras de la celeridad y para evitar traumatismos.

Lo anterior en razón a que, el reparto y demás gestiones de los procesos ordinarios y de tutela se realizan a través de las Secretarías de cada Sala Especializada, esta oficina maneja los asuntos de Sala Plena y temas administrativos.

John Alexander Ruiz Beltrán
Auxiliar Judicial 03
Secretaría General
(571) 562 20 00 ext. 1218
Calle 12 N.º 7-65, Bogotá, Colombia.

De: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 5 de septiembre de 2022 12:21 p. m.

Para: John Alexander Ruiz Beltran <Johnrb@cortesuprema.gov.co>

Cc: Carlos Orlando Hernandez Chiquiza <carloshc@cortesuprema.gov.co>; Yeimy Alexandra Vargas Lizarazo <Yeimylv@cortesuprema.gov.co>

Asunto: RV: RECURSO DE CASACION: PPL- JAIMES RUIZ RICAR ANDERSSON

2 Buenos días envío acción de tutela de RICAR ANDERSSON JAIMES RUIZ contra la Sala Penal del Tribunal de Cúcuta.

Muchas gracias y que tenga un feliz día.

Cordialmente,



Adriana Ramírez Peña
Asistente Administrativo Grado 06
Secretaría General
(571) 562 20 00 ext. 1205
Calle 12 N° 7 - 65
Bogotá, Colombia.

De: Solicitudes Juridica Cocucuta <solicitudesjuridica.cocucuta@inpec.gov.co>

Enviado: lunes, 5 de septiembre de 2022 9:40 a. m.

Para: Secretaria General Corte Suprema <secretariag@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RECURSO DE CASACION: PPL- JAIMES RUIZ RICAR ANDERSSON

DG: CSTEILLANOS

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo

previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

San Jose de Cucuta, Norte de Santander.

Señores.

Honorable Corte Suprema de Justicia.
Juez E. Constitucional.

COMPLEJO CARCELARIO
Y PENITENCIARIO
CUCUTA - CUCUTA

Referencia

Accion de tutela articulo 86 del C. N. 91.

Cordial Saludo.

Richard Andersson Jaimes Ruiz, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía cuyo numero y lugar de expedicion aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre propio conforme a la legitimidad que me asiste como ciudadano de esta Soberana Nacion y suficiente para actuar por medio del presente escrito invocando a virtud las constitucionalidades de los articulos 13 y 95 a su vez el 85 de la carta politica, por medio del presente instauró ante su decoroso, honorable y digno despacho, Accion de TUTELA conforme al articulo 86 de la carta politica; contra el Juzgado Quinto Penal del circuito con funcion de conocimiento de Cucuta representado por el honorable Juez doctor Cesar Alejandro Ordóñez Ochoa y/o quien haga sus veces al momento de la notificacion respectiva al igual que representacion en el mismo, Sala Penal del Tribunal Superior de Cucuta el honorable Magistrado Ponente doctor Edgar Manuel Caicedo Barrera. Despachos Judiciales ubicados en el palacio de Justicia Francisco de Paula Santander de Cucuta Norte de Santander por la violacion flagrante de los derechos humanos fundamentales y constitucionales, entre otros, el acceso a la segunda instancia mediante recurso judicial efectivo, el derecho a la igualdad, el acceso al recurso extraordinario de casacion, debido proceso, la Presuncion de inocencia; de la misma manera efectiva violacion de la Convencion Americana sobre derechos humanos y Pacto Internacional de derechos civiles y politicos; de acuerdo con las siguientes consideraciones...

ENTIDAD DEMANDADA

Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, Representado por el honorable Juez doctor Cesar Alejandro Ordoñez Ochoa y/o quien haga sus veces al momento de la respectiva notificación, Tribunal Superior de Cúcuta honorable Magistrado Ponente doctor Edgar Manuel Caicedo Barrera de la Sala Penal de Cúcuta, Auto 005 de 1997 Magistrado Ponente Eugenio Fernandez Galindo (vinculación) es a quienes tengan que rendir contradicción.

CAUSA PETENDI Y OMISIONES

Primero: Condenar a Richard Andersson Jaimes Ruiz, identificado plenamente en la actuación, a la Pena Principal de 400 meses, como autor responsable de la Conducta Punible de homicidio agravado.

Mediante el Secretario elabórese inmediatamente la boleta de encarceración. Comuníquese a la cárcel.

Segundo: Condenarla a la Pena Accesorial de Inhabilitación para el ejercicio de derechos y Funciones Públicas a la Pena de veinte (20) años.

Tercero: NEGARLE el otorgamiento de la Suspensión Condicional de la ejecución de la Pena y la Prisión domiciliaria como sustitutivo de la Prisión.

Cuarto: Una vez ejecutoriado este Fallo, envíese el cuaderno original a la Oficina de Servicios administrativos de los Juzgados de ejecución de Penas y medidas de Seguridad, para lo de su competencia. Cúmplase el Juez Cesar Alejandro Ordoñez Ochoa Juez.

En mérito de lo expuesto; el Tribunal Superior del distrito Judicial de Cúcuta - Sala Penal de decisión, administrando Justicia en nombre de la república

RESUELVE

Primero: CONFIRMAR la Sentencia de Origen y Fecha señaladas, con base en los argumentos referidos en la motivación.

Segundo: Por Secretaría de la sala, COMPULSAR copias de la presente decisión con destino a la Fiscalía General de la Nación para que, si lo considera del caso, inicie la investigación por el delito de Falso testimonio contra Wilson Antonio Rueda Nieto, Jhon Freddy Rueda Nieto y Ana Graciela Nieto Galviz, conforme las razones expuestas en la Parte Motiva de esta Sentencia.

Tercero: Contra esta providencia procede el recurso extraordinario de casación

Cuarto: Una vez en firme, por la Secretaría de la sala, DEVUELVASE la actuación al Juzgado de origen, para lo de su cargo. Notifíquese y cumplase Edgar Manuel Calcedo Barrera magistrado Ponente, Juan Carlos Conde Serrano, Soraida García Forero, Olga Enid Celis Celis Secretaria Sala Penal."

Segundo:

Decisión recurrida por parte de la defensa y del aquí suscrito en el mismo rito procesal y sustentada oportunamente en la fecha del día 14 de marzo de 2021 en la cual también tuvo su oportunidad la Fiscalía 11 Seccional Unidad de vida e integridad personal Silvia Foride Chavez Peña y el Ministerio Público Procurador go Judicial Penal de Cúcuta Jorge Enrique Carvajal Hernández, seguidamente también solicitada el recurso extraordinario de casación oportunamente por el aquí suscrito y abandonado totalmente por parte de la defensa el día 18 de agosto de 2022 en los términos legales después de su notificación, sin que a la fecha de la interposición de la presente Acción CONSTITUCIONAL la honorable corte suprema de Justicia de Bogotá D.C. Sala de Casación Penal dentro de sus buenos oficios Jurídicos; haya programado resolver el recurso programado y sustentado por el suscrito de manera oportuna.

Tercero:

Para el día de la celebración y/o materialización de la audiencia de la lectura de la sentencia al juzgado quinto penal del circuito con función de conocimiento propio la Boleta de Encarcelación N° 0297; donde se le comunico al complejo penitenciario y carcelario Metropolitano de Cúcuta que Richard Andersson Jaimes Ruiz, bajo orden

de dicho despacho ordeno la encarcelación del Sentenciado quien se encontraba en libertad Provisional, para el cumplimiento de la Sentencia que se impuso; orden materializada y en la actualidad, el suscrito se encuentra cumpliendo dicho orden Judicial en el Pabellón 11 de dicho Complejo Penitenciario y carcelario en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander.

Cuarto

Por parte del Juez de instancia; Es notorio la evidente contradicción Jurídica, acto realizado que efectivamente procrea en consecuencia lógica y jurídica, la vulneración que hoy nos convoca, Fulminante diana contra el debido Proceso y el Principio de legalidad; no se entiende como un Juez de la República, investido de Jurisdicción y Competencia no cumple con su encargo; lo que nos conduce a analizar lo siguiente; el numeral cuarto de la referida Sentencia reza... CUARTO: Una vez ejecutoriado este Fallo, envíese al Cuaderno original a la oficina de Servicios administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad, para lo de su cargo". entonces tenemos que dicha resolución fue objeto de apelación, como quiera que el recurso de casación, y a la cronología de hoy; no se encuentra resuelta; lo que nos traduce que efectivamente no está debidamente ejecutoriada, ni en Firma, lo que hace que la decisión se encuentre latente, como lo provee el mismo Juez en el numeral CUARTO cuando dice una vez ejecutoriado este Fallo, una vez en Firma" (este último por la Sala Penal del Tribunal Superior), en otras el administrador de Justicia no materializó su decisión.

El aspecto central que ha generado la violación constitucional del asunto que hoy nos convoca, es el no permitir la ejecutoria y/o Firma de la decisión, además desconociendo directamente los efectos en que se encuentre dicha decisión lo que genera la razón del por que existe

PROCEDENCIA DE TUTELA.

La acción de tutela está prevista en el artículo 86 de la constitución política para que, mediante un procedimiento preferente y sumario, se protejan derechos fundamentales de las personas, cuando resultan transgredidos o

amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos establecidos por la ley, y a falta de otro medio de defensa judicial, al menos que se este frente a un perjuicio irremediable que se haya procedente como mecanismo transitorio. De manera reiterada la honorable corte constitucional se ha pronunciado sobre el carácter "subsidiario" de la acción de tutela, la cual permite a las personas acudir ante los jueces, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales, siempre y cuando no exista a su alcance otro medio de defensa judicial o se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultando claro entonces que el mecanismo mencionado no se encuentra diseñado para reemplazar a los jueces competentes, por ello, no puede acudirse a la tutela cuando el accionante cuente con otro mecanismo judicial para invocar la protección de sus derechos fundamentales, limitándose la competencia del juez de tutela a examinar y verificar el acto que se presume es violatorio de los derechos que se presumen violados o amenazados.

La presente acción de tutela es procedente por cuanto cumple con los requisitos exigidos en el artículo 86 de la Constitución política de Colombia. En efecto contra las actuaciones que han causado violación y continúan violando el derecho a la igualdad, la presunción de inocencia, al debido proceso, el acceso a la segunda y tercera instancia mediante recurso judicial efectivo; de la misma manera efectiva aferrándose a intentar contra el bloque de constitucionalidad; violación de sus instituciones, la Convención Americana sobre derechos humanos y pacto internacional de derechos civiles y políticos; donde se dan las siguientes circunstancias

Primero:

Principio de Favorabilidad. Prospectividad de la ley Penal. La Carta política de Colombia radica que "En materia Penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable". Lo que arroja que nuestra carta superior; no comporta limitación alguna para la aplicación del principio de favorabilidad en materia Penal; generando entonces que ha de aplicarse la norma más favorable sin talancera y/o limitación alguna. Pues se ha

mantenido en nuestra legislación que "ley Favorable, en pocas palabras, es aquella del ordenamiento (Penal y extrapenal) que mejora, de cualquier manera la situación del Ciudadano". Generando que frente a los argumentos para su activación radica una sólida razón Fundamento para su aplicación Se sostiene con Potísima razón que "En el Conflicto de leyes que se presenta, entonces, Impónese escoger las mas benignas para aplicarlas al Procesado Conforme con el Principio Universal que predica ampliar para él lo favorable y restringir lo odioso". Esto también se compacta al artículo 4 de la carta principio constitucional "aplicación Constitucional"

Segundo:

El artículo 44 de la ley 153 de 1887 "LEY ABUELA; LEY VIGENTE", anuncia algunos casos de aplicación del Principio y allí se establece que:

"los casos dudosos se resolverán por Interpretación benigna". por ello se es tajante cuando se afirma que: "es indiscutible que expedida la norma, tiene fuerza y por tanto cabe su utilización retroactiva". y se concluye frente a las personas condenadas: "finalmente, en los asuntos de Favorabilidad relacionados con Condenados, cabe recordar que se está ante una excepción al Principio general de cosa Juzgada, circunstancia que no duele al derecho Penal por cuanto se trata de vitalizar una situación respaldada por la Constitución, por la ley y por tratados internacionales". por ello en el mismo código Penal actual que en su artículo 6º cuando establece: "ELLO TAMBIEN RIGE PARA LOS CONDENADOS". por ello con razón se afirma que para hacer efectivo dicho Principio basta aplicar la ley Penal mas Favorable y punto. Sabemos igualmente que en la ultraactividad de la ley Penal se aplica una ley ya derogada o subrogada (esto es que no está vigente al momento de adoptar la decisión), toda vez que la nueva ley que se encuentra rigiendo le perjudica, pero que aun así, en aras del Principio de Favorabilidad se aplica sin ningún condicionamiento alguno simplemente porque le resulta mas Favorable al Procesado la ley anterior. Igual ocurre en lo que denomino respectividad de la ley Penal, esto es, aplicar la nueva ley que ha sido expedida, sancionada, promulgada y que regirá en el futuro por

resultar mas Favorable a los Procesados. O condenados, Precisamente, en desarrollo del ilimitado Principio de Favorabilidad que venimos avanzando. Solicitando desde ya, la aplicacion a la respectividad de la ley penal.

Segundo:

Codigo de Procedimiento Penal articulo 1o Actuacion Procesal. la actuacion procesal se desarrollara teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales que siendo personas intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales horden prevalecer el derecho sustancial.

Para alcanzar esos efectos seran de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, la utilizacion de los medios tecnicos pertinentes que los validen y los terminos fijados por la ley o el funcionario para cada actuacion (negrilla fuera del texto).

El Juez dispondra de amplias facultades en la forma prevista en este codigo para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demas intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos. El Juez podra autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales.

Tercero:

El Juez Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento al momento de imponer la sancion penal de instancia; no cumple con su obligacion de corregir los actos irregulares; ni respecto derechos y garantias del suscrito Richard Andersson Jaimes Ruiz. Contrariando lo expuesto por la corte en el sentido de "Las autoridades deben verificar en cada caso concreto la procedencia de los subyugados penales como la prision o detencion domiciliaria, la vigilancia electronica y la libertad provisional, pues estas desarrollan finalidades constitucionales esenciales en el estado social de derecho". Efectivamente el Juez primario actuó sin importar la ejecutoria de su decision, olvidando el efecto en que se encontraba dicha decision, generando un impacto mortal contra el principio de legalidad juridica existente en Colombia.

además contra la Segunda Instancia. Indebida aplicación, confusión respecto al artículo 450 del código de Procedimiento Penal, al igual el juez de Segunda Instancia que en su momento tuvo la oportunidad de ordenar que el debido proceso se respetara en dicha continuidad del suscrito en libertad provisional invocando esta la Sentencia C-221 de 2017, ya que su decisión tardó más de 480 días y para dicha decisión utilizó la técnica desfavorable por las solicitudes entabladas en celeridad para la misma. Conociendo la normativa y pleno conocimiento de mi inocencia, e inobservando la misma favorable ya que la decisión desfavorable que tomó el doctor Edgar Manuel Caicedo Barrera, aun no está en firme pues se procedió al recurso extraordinario de casación.

Cuarto:

Código de Procedimiento Penal Colombiano Capítulo VII Recursos ordinarios. Artículo 176 Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición y la apelación. Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.

Artículo 177 Efectos. < Artículo modificado por el artículo 13 de la ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente: > la apelación se concederá:

En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación se resuelva:

1. la Sentencia condenatoria o absolutoria
2. El auto que rechaza o decreta la solicitud de Preclusión.
3. El auto que decide la nulidad
4. El auto que niega la prueba en el Juicio oral y
5.
6. (todas las negrillas en este numeral fuera del texto).

Artículo 178. Trámite del recurso de apelación Contra autos. < Artículo modificado por el artículo 40 de la ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: > Se interpondrá, sustentará y correrá traslado a los no impugnantes en la respectiva audiencia. Si el recurso fuere debidamente sustentado se concederá de inmediato ante el Superior en el efecto previsto

en el artículo anterior (negrilla fuera del texto).

Entonces honorable Pretor si es así como procedió el Juez quinto Penal del circuito con función de conocimiento, pues sencillamente, no tendría sentido la interposición de los recursos y en consecuencia tampoco tendría valor, ni sentido los efectos naturales de la aplicación de estos recursos. RESPETUOSAMENTE nos encontramos frente a una vía de hecho (perturbación pretoriente a la aplicación de la norma adjetiva o sustantiva del derecho).

ASPECTOS SUSTANCIALES DESCONOCIDOS EN LA PRESENTE ACCION CONSTITUCIONAL

La sentencia adoptada como unidad de acto jurídico complejo y si bien es cierto que el suscrito Richard Andersson Jaime Ruiz, se encontraba con una medida de aseguramiento no privativa de la libertad es decir libertad provisional, no aparecía la implicación de privarlo de su libertad en centro penitenciario y carcelario, pues este ostenta dicha condición de libertad provisional; lo que resulta así desproporcionado pues al suscrito Richard Andersson Jaime Ruiz se encontraba en libertad provisional, se produce sentencia condenatoria, pero el suscrito interpone y sustenta oportunamente dicho recurso de apelación, entonces la pregunta que se hace este suscrito es, ¿por qué razón sin encontrarse en firme o ejecutoriada dicha decisión fui y estoy retenido en centro penitenciario y carcelario metropolitano de Cúcuta si el mismo Juez de primera instancia en su numeral cuarto de la sentencia advierte que una vez ejecutoriado este fallo, enviase al cuaderno original a la oficina de servicios administrativos de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad para lo de su competencia y a su vez al numeral cuarto de la decisión de la sala penal del tribunal superior de Cúcuta advirtiéndole que una vez en firme por la secretaría de la sala devolvase la actuación al juzgado de origen. Para lo de su cargo. Orden que resulta desproporcionada frente al debido proceso y el principio de legalidad jurídica; dejando en el limbo jurídico el recurso de apelación como instrumento judicial efectivo conforme al ordenamiento penal, en cuanto a la sanción impuesta, ya que dicha presunción solo puede ser desvirtuada en virtud de sentencias condenatorias debidamente ejecutoriadas.

Y / O en firme; ASUNTO QUE NO SE
ADECUA EN ESTE EVENTO, e inclusive ni,
se ha resuelto el recurso extraordinario
de casacion

En el evento que hoy nos ocupa, el honorable
Juez Quinto penal del circuito de conocimiento
de cúcuta; se aparta de la obligación
encargada, menos de evaluar y valorar
adecuadamente las circunstancias todas aquellas
relacionadas con el evento penal que nos
convoca, recibiendo por parte del ad quo
desprotección a la integridad de los derechos
Fundamentales. El Juez de conocimiento no
asumió ni estimo que la privación de la
libertad es excepcional y que mas aun debe
serlo la privación de la libertad intramural,
por lo cual y de conformidad con la doctrina
reconocida por la corte, tampoco verifico en
este caso concreto la procedencia del beneficio
Prerrogativo que gozaba el suscrito Richard Andersson
Jaimes Ruiz como la libertad proporcionada
Provisional bajo los plazos RAZONABLES del debido
Proceso, cumpliendo esta finalidad como aspecto
sustancial de nuestro Estado social de derecho.

El honorable Juez Quinto penal del Circuito
con función de conocimiento de cúcuta, efectivamente
olvido que

"En efecto, en forma reiterada la Jurisprudencia
de esta corporación señalado que con
Fundamento en lo dispuesto por los numerales
1º y 2º del artículo 75 de la Constitución,
que consagra la llamada cláusula general
de competencia, corresponde al legislador
regular los procedimientos judiciales y administrati-
vos. Con base en tal facultad general
puede el congreso NACIONAL definir las ritualidad-
es propias de cada Jefe, la competencia
de los funcionarios que deben conocer de
los asuntos, los recursos que proceden contra
las decisiones, los terminos procesales,
el regimen de pruebas, los mecanismos
de publicidad de las actuaciones etc.
(Negritas fuera del texto).

Dichos limites fueron Racionalizados, entre otros Fallos,
en la Sentencia C-319 de 2013, que examino
el artículo 16 de la ley 343 de
1997, que habia sido acusado de inconstitucionalidad
por violar el Principio de doble instancia. Allí
la corte Preciso que al Configurar los
Procedimientos Judiciales el legislador tiene cuatro
limites que deben ser evaluados respecto de

la medida que se examine. Así dijo
(Negrilla Fuera del texto).

"Sin embargo, a pesar de la amplitud del margen de configuración normativa andado, la Jurisprudencia también ha señalado que la potestad del legislador para definir los procedimientos judiciales está sometida a límites precisos que, si bien son igualmente amplios, en todo caso permiten hacer compatibles al proceso judicial con la Constitución. Estos límites pueden agruparse en cuatro categorías, a saber:

1. La fijación directa, por parte de la Constitución, de determinado recurso o trámite judicial
2. El cumplimiento de los fines esenciales del Estado y particularmente de la administración de Justicia
3. La satisfacción de principios de razonabilidad y Proporcionalidad y
4. La eficacia de las diferentes garantías que conforman el debido proceso y el acceso a la administración de Justicia." (Negrilla Fuera del texto).

El ad quo, olvido del derecho Fundamental que se ubica en el artículo 29 de la Constitución Política, donde se afirma que "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", y en consecuencia lógica y Jurídica; da paso a una serie de garantías que lo conforman. El ad quo, olvido que Colombia es un Estado Parte en numerosos tratados internacionales que reconocen este derecho y establecen obligaciones de respeto y garantía que deben ser cumplidas. En primer lugar, se tiene el artículo 10 de la declaración universal de los derechos humanos, que establece que "toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia Penal". Dentro de la misma línea, el artículo 14 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos contiene una serie de garantías que engloban el debido proceso Penal legal y Judicial, la primera de las cuales señala que "1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de Justicia toda persona tendrá derecho

a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil (Pegritillas fuera del texto).

En el caso del Sistema Interamericano, la Convención Americana sobre derechos humanos contiene dos normas determinantes como son el artículo 8 sobre Garantías Judiciales y el artículo 25 sobre Protección Judicial. La primera de estas recoge la línea de protección de la declaración universal y el Pacto Internacional al establecer que "1 Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo RAZONABLE, por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial (...)", dando luego paso en el numeral 2, una serie de garantías que engloban ese derecho (Pegritilla fuera del texto).

El artículo 25 de la Convención es especialmente significativo, pues establece el derecho a las garantías judiciales, reconociendo el derecho al recurso judicial efectivo, de acuerdo con el cual, "1 toda persona tiene derecho a un recurso sencillo o rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones" (Pegritillas fuera del texto).

La Corte Constitucional ha señalado que "El debido proceso es un derecho de estructura compleja que se compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados garantizan que la acción punitiva del Estado no resulte ARBITRARIA" y ha relacionado esas garantías con el derecho al recurso judicial efectivo establecido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre derechos humanos. Dentro de esta perspectiva ha sido la Sala Plena de este tribunal que "el derecho fundamental al debido proceso comprendido como un complejo de garantías a favor de las partes, guarda unidad de sentido con la concepción que del derecho a un recurso judicial efectivo ofrece el derecho internacional de los derechos humanos (Pegritilla fuera del texto).

Sobre el punto resulta concurrente el concepto de debido proceso legal fijado por la Corte Interamericana que vincula el conjunto de garantías protegidas por el debido proceso, con la exigencia de efectividad que deben tener los recursos e instrumentos destinados a su operación y defensa. Al respecto señalo puntualmente que (Negrilla fuera del texto).

El derecho a impugnar es el derecho general que tienen todas las personas, de solicitar el control judicial de un acto o de atacar la norma o la forma o el contenido de una providencia judicial. En sentido concurrente, el derecho a recurrir, consiste en el derecho a interponer recursos judiciales y es la concreción del derecho a impugnar. Dentro de esta perspectiva, el derecho a impugnar se materializa con la interposición de los recursos judiciales, que son justamente los instrumentos que concretizan el derecho a impugnar (Negrilla fuera del texto).

El derecho a recurrir consiste en el ejercicio de un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso a cualquier título y condición, para que se corrijan los errores del juez, que le causen gravamen o perjuicio, mientras que el recurso es la petición formulada por una de las partes; principales o secundarias, para que el mismo juez que profirió una providencia o su superior la revise, con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento (in iudicando o in procedendo), que en ellas se hayan cometido. En este sentido se trata de un acto procesal propio de las partes involucradas dentro de un proceso judicial (Negrilla fuera del texto).

Ahora bien independientemente de que se ejerza el derecho a impugnar o el derecho a recurrir, el punto central es que el instrumento de defensa debe ser efectivo, en el sentido de permitir la protección y la restitución real de la integridad de los derechos que han sido eventualmente vulnerados por la actuación del juez (Negrilla fuera del texto).

Alrededor del derecho al recurso judicial efectivo como componente del debido proceso concurren además del artículo 29 de la constitución, el principio de efectividad establecido del artículo 2 de la carta política, el artículo 25.1 de la convención Americana sobre

derechos humanos, y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana (Negrilla Fuera del texto).

El Principio de efectividad está contenido en el artículo 2 de la Constitución, que en el inciso primero establece un mandato a cargo del Estado de señalar que "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (C. . .)" (Negrilla Fuera del texto).

Dentro de esa línea se tiene el artículo 25.1 de la Convención Americana, sobre potencial a la Protección Judicial, ya anunciado, que garantiza específicamente el recurso Judicial efectivo derecho como tal componente del debido proceso. La Corte Interamericana le ha fijado dos contenidos explícitos al derecho al recurso Judicial efectivo como componente del debido proceso. El primero de ellos, señala que el recurso Judicial debe ser útil. Y el segundo, que el recurso debe dar el resultado para el que fue concebido. Bajo esa comprensión señala la Corte en la Sentencia de Fondo Proferida en el caso *Cabrera García y Montiel Flores* contra México (Negrillas Fuera del texto)

"En el mismo sentido, la Corte ha señalado que los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y de las garantías del debido proceso legal ante las autoridades componentes, que amparen a todas las personas bajo su Jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. También ha establecido que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos del mismo, es decir que den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sean en la Convención, en la Constitución o en la ley. La Corte ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente (Negrilla Fuera del texto).

er Sobre el Particular, existe un evidente vínculo entre el acceso a la administración de Justicia y contar con un proceso sin dilaciones injustificadas. Como se señaló anteriormente, la protección del derecho a un recurso judicial efectivo no puede tener un carácter eminentemente formal, sino que debe ser material

La Corte Constitucional evalúa el caso en sede de revisión, procediendo al amparo de los derechos de la Señora desde los estándares de la Corte Interamericana, que el recurso judicial efectivo debe ser:

1. recurso ordinario, en este entendido el derecho a interponerlo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada
2. recurso accesible, las formalidades requeridas para su admisión deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente
3. recurso eficaz, ya que no basta con su existencia formal, sino que este debe permitir que se obtengan resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido;
4. recurso que permita un examen o revisión integral del fallo recurrido;
5. recurso al alcance de toda persona condenada
6. recurso que respete las garantías procesales mínimas. (Véngalas fuera del texto).

De este modo se tiene de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos y de la Corte Constitucional, el recurso judicial efectivo eficaz, dentro del que se comprende el derecho de acceso a la segunda instancia o más instancias como al recurso extraordinario a la cesación que son componentes del derecho fundamental al debido proceso y suponen la existencia de mecanismos procesales accesibles, idóneos y eficaces que permitan el control y la revisión de las decisiones judiciales en aquellos casos en que los afectados consideren vulnerados sus derechos

Dentro de esta comprensión las decisiones judiciales que carezcan de medios adecuados de control y revisión, o que existiendo, sean simplemente nominales o no sean eficaces, implicarán la violación del derecho al debido proceso, en tanto que las personas afectadas se verán forzadas a asistir a la afectación de sus derechos sin contar con un instrumento procesal que permita la exposición de sus valores y la defensa de los mismos.

Esta circunstancia resulta aún más comprensible si se tiene en cuenta, que el acto específico que contiene el anuncio del sentido del fallo y la decisión sobre la libertad de quien ha sido observado como culpable, tiene como mecanismo de impugnación el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, la que será proferida "en un término que no podrá exceder de 15 días contados a partir de la terminación del juicio oral".

Pero una vez proferido el texto de la sentencia, procede al recurso de apelación en contra de la misma como segundo medio de control, en virtud del cual podrá ser impugnada tanto la condena, como la orden de la privación de la libertad. La procedencia de la segunda instancia en ese momento procesal es la consecuencia inevitable del hecho de estar frente al acto judicialmente completo que involucra al anuncio del sentido del fallo y al texto de la sentencia. El artículo 179 del código de procedimiento penal, modificado por la ley 1345 de 2010, dispone que el recurso de apelación contra la sentencia "se interpondrá en la audiencia de lectura de fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado dentro de la misma o por escrito en los (5) cinco días siguientes", norma que fue declarada exequible por medio de la sentencia e-371 de 2017 donde esta corporación dijo además, que "25 Sobre las finalidades que orientan este medio ordinario de impugnación vea Sentenciado la corte, que su propósito es el de remediar los errores judiciales y permitir una nueva evaluación del caso, que suministre el convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoce pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritan un razonamiento y juicio diferente."

Lo cierto es que no existió audiencia de segunda instancia ni tampoco se respetó los términos allí plasmados para la misma.

De este modo se tiene que la apelación es el recurso judicial efectivo dispuesto por el ordenamiento penal respecto del fallo condenatorio, medio que involucra el control judicial sobre la sentencia y lo decidido en ella, para el caso, la detención sobreviniente con el anuncio del fallo, como elemento constitutivo de aquella.

Atiende la Sala al cargo por la eventual violación de la Presunción de inocencia. Esta corporación ha sostenido que "la Presunción de inocencia es un derecho en virtud del cual la persona deberá ser tratada como inocente, mientras no se demuestre lo contrario a través de un proceso judicial adelantado con todas las garantías, en el cual se le haya declarado judicialmente culpable mediante sentencia ejecutoriada."

Richard Andersson James Ruiz; ostentaba y aplicaba, el beneficio de dicha Presunción de inocencia y debido Proceso a los Plazos razonables libertad Provisional; PUES en vista que su sentencia condenatoria no se encuentra ejecutoriada, ni en firme, lo que genera que el Sencionado goze de la Presunción de inocencia.

Para la Sala la Premisa sostenida por el demandante sería correcta, en relación con la Presunción de inocencia que ciertamente se mantiene hasta la ejecutoria del fallo condenatorio. Si la conclusión de su razonamiento no fuera equivocada, pues la detención o retención que se decreta con el sentido de fallo sobreviene propiamente como consecuencia de la satisfacción del criterio de necesidad ya precisado, y no únicamente como consecuencia de la condena y la pena dispuesta, que tan solo atorarán con el texto escrito del fallo y su posterior ejecutoria. Es justamente por esto que el acto debe ser motivado, de modo tal que en el momento procesal adecuado, es decir, con la emisión del texto escrito de la sentencia, sobre venga la apelación como medio de control efectivo.

El Juez de conocimiento al momento de dictar sentido de fallo y tomar decisiones al rededor de la libertad del acusado, está en la obligación de evaluar todas las

Circunstancias relacionadas con el caso y la conducta del mismo. Sentencias C-980 de 2010 y C-044 de 2017, velando por la integridad de sus derechos fundamentales y la vigencia del principio pro libertate. Adicionalmente, debe considerarse que la privación de la libertad es excepcional y que más aun debe serlo la privación de la libertad intramural, por implicar una afectación más profunda de los derechos fundamentales, por lo cual y de conformidad con la doctrina reconocida por esta Corte, "las autoridades deben verificar en cada caso concreto la procedencia de los subrogados penales y la libertad provisional pues estas desarrollan finalidades constitucionales esenciales en el Estado Social de derecho".

El ad quo olvido que el recurso judicial efectivo es un derecho que supone la existencia de mecanismos procesales accesibles y eficaces que permitan el control y la revisión de las decisiones judiciales, cuando los afectados consideran vulnerados sus derechos.

En la Sentencia C-106 de 1994, la Corte afirmó: "Claro está tratándose del derecho fundamental de la libertad, aplicando el artículo 94 de la Constitución Política, el alcance de su garantía constitucional debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales consienten la detención preventiva como una excepción, es decir como un instrumento al cual únicamente puede recurrirse en los casos previstos por la ley y dentro de sus rigurosos límites, sin perjuicio de las garantías que aseguren la comparecencia del sindicado al pertinente juicio y su disponibilidad para la ejecución del fallo, tal como se ha subrayado en esta sentencia" (Negrilla fuera del texto).

Señalan que la Presunción de inocencia es una parte integrante del debido proceso.

CONFORME A LOS TERMINOS DE INSTANCIA EXCEPCIONALIDAD EN LA RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD EN LA SENTENCIA EJECUTORIADA.

Derechos que se consideran violados

En conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, se ha violado el derecho fundamental de:

- La Igualdad artículo 13 de la Carta Política.
- Debido Proceso y Presunción de Inocencia artículo 29 de la Carta.
- El acudimiento a la Segunda Instancia artículo 31 de la Carta.
- Bloque de Constitucionalidad artículo 93 de la Carta Política.
- Convención Americana de derechos humanos artículo 7: 2 y 8. 2.
- Pacto internacional de derechos civiles y políticos; Artículos 9, 4 y 14.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Fundamento esta dación en el artículo 86 de la Constitución Política.
- Decreto reglamentario 2591 de 1991.
- Decreto 1382 de 2000.
- Bloque de Constitucionalidad.
- Declaración universal de los derechos humanos.
- Pacto de derechos civiles y políticos.
- Convención de los derechos humanos.

PRETENSION SUPRAESPECIAL

Primero:

Se protejan los derechos fundamentales en favor del suscrito quien se encuentra recluso en el Complejo Penitenciario y carcelario de Cúcuta Richard Andersson James Ruiz; entre ellos la igualdad, debido Proceso y Presunción de Inocencia, el acceso a la segunda instancia mediante recurso judicial efectivo, el Bloque de constitucionalidad y sus instituciones entre ellas la Convención americana de derechos humanos, y el pacto internacional de derechos civiles y políticos, desconocidos efectivamente por el Juzgado quinto penal del Circuito con Función de conocimiento de Cúcuta y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta Magistrado

Edgar Manuel Calcedo Barrera, y a quien
 haya que vincular auto 005 de 1997,
 falta de defensa digna técnica y eficaz, que
 hace parte integral del debido proceso desde
 sus fundamentos, y en consecuencia lógica
 y jurídica se

Segundo:

Se ordene al Jurado (5) quinto penal del
 circuito con función de conocimiento de cúcuta
 honorable juez doctor Cesar Alejandro Ochoa,
 y/o quien haga sus veces al momento
 de la notificación respectiva, REGRESAR
 la libertad provisional a Richard Andersson
 James Ruiz hasta que la decisión de
 instancia al recurso extraordinario de casación
 se resuelva de fondo conforme vea el
 numeral cuarto de la sentencia condenatoria y
 segunda instancia una vez en firme.

Competencia

Son ustedes honorable Corte Suprema de
 Justicia Boyota D.C. competentes para
 conocer de la presente acción de tutela
 de acuerdo a lo establecido en el decreto
 1382 de 2000.

Juramento

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que,
 hasta la fecha no he presentado otra solicitud
 a cualquier otra autoridad, sobre la
 misma violación o derecho.

Pruebas.

Me permito allegar como prueba, los siguientes
 documentos:

1. Copia de sentencia condenatoria 14 de
 marzo de 2021 proferida por el Jurado
 Quinto Penal del circuito de cúcuta.

El disco de la audiencia reposa sobre el despacho
 ante la falta de defensa técnica digna y
 eficaz, al igual que el acta de la audiencia.

2. Copia de la respuesta de segunda instancia,
 por el honorable magistrado Edgar Manuel
 Calcedo Barrera.

3. Copia de la Boleta de encarcelación,
 proferida por el despacho fallador.

4. El disco de la sustentación de la apelación se encuentra en el despacho Fallador para la Fecha 19 de Julio 2021
5. Copia de la respuesta de Acción de Revisión Negada esto para comprobar el agotamiento de todos los recursos
6. Documentos de Solicitudes de libertad Provisional al Tribunal Superior y la respectiva apelación de la misma no cancelada en el Juzgado Fallador.

ANEXOS

Solicito se tenga en cuenta todos los documentos reseñados en el acápite de Pruebas documentales. 63 Folios

Notificaciones.

Las mismas las recibire en el Pabellón 11 del COCUC.

Rogarle, Señor Juez Constitucional, TUTELAR a mi favor y ordenar el trámite de la ley para esta petición.

DE USTÉDES MUY RESPETUOSAMENTE.

Richard Liz.

1093 766 773

108389.

Pabellón 11 del COCUC.



✓